

AGENDA CIUDADANA

LA MARCA DE LOS ZORROS

Lorenzo Meyer

Indicador.- La tortura y asesinato de presuntos delincuentes en el Distrito Federal por policías dirigidos por militares con licencia, es un indicador más del deterioro tanto de la seguridad pública como de la procuración de justicia en la Ciudad de México y en el país en general. La otra cara de la moneda la constituye la complicidad de la policía con secuestradores que han hecho del sadismo parte integral de su actividad. En ambos casos, la víctima final ha sido el Estado de Derecho, o lo que aún queda de él.

Ni duda que el gobierno que está por concluir en la capital del país se va con “la marca del zorro” y de muchas otras cosas igualmente desagradables. A la acusación de tortura y asesinato de seis presuntos asaltantes el 8 de septiembre por los agrupamientos de élite de la policía capitalina -- “zorros” y “jaguares” --, hay que añadir un posterior intento de motín de ese cuerpo en el cuartel de Tlahuac y combinarlo con la irregular detención del “jefe zorro” -- el general brigadier José Lamberto Ponce Lara -- quien, pese a ser un militar con licencia, primero fue presentado ante la justicia militar en compañía de dos jefes, antes de ser turnado a donde debió estar desde un inicio: a la autoridad civil. Lo anterior es sólo un eslabón más de una desafortunada y larga cadena de incompetencia, prepotencia y corrupción, cuyo último episodio acaba de ser puesto al descubierto por el diario Reforma (24 de noviembre): la posible complicidad de policías judiciales capitalinos, del Estado de México y de ciertos militares en activo, con la banda de secuestradores y mutiladores capitaneada

por Daniel Arizmendi, cuyas ganancias anuales se calculan en 50 millones de pesos. Como veremos, en materia de seguridad y policía, la tecnocracia modernizadora ha acabado por llevarnos no al siglo XXI sino al XIX o, quizá, a algo peor.

Un Problema sin Solución.- El de la seguridad pública es un problema viejo y mal resuelto en México. En ciertas épocas, la autoridad ha hecho esfuerzos más o menos exitosos en ese campo, pero finalmente, cuando las instituciones políticas han entrado en decadencia o de plano se han desintegrado, como, por ejemplo, en el siglo XIX, la criminalidad ha florecido hasta convertirse en un flagelo. En esas circunstancias, la diferencia entre soldados, policías y criminales se ha borrado, y la vida colectiva ha quedado marcada por el miedo, la desconfianza y la crispación.

En el río revuelto de nuestro proceso político actual, que combina el fin de lo viejo -- el largo monopolio del poder por un sólo partido dentro de una estructura económica semicerrada -- con la precariedad de lo nuevo -- un sistema político plural que aspira a la democracia y una economía lanzada a la globalización --, la ganancia no sólo ha sido la de un puñado de grandes capitales que han concentrado fortunas inmensas --algunas al amparo del tráfico de influencias --, sino también para miles de criminales que, con el impulso producto del deterioro del nivel de vida de las clases populares y la complicidad e ineficiencia de la policía, se han lanzado con gran ferocidad y eficacia a robar, asaltar, secuestrar, torturar y asesinar con casi total impunidad -- el 97% de los delitos denunciados en la Ciudad de México no son aclarados -- y con un

espíritu perversamente democrático, pues sus víctimas pertenecen ya a todas las clases sociales.

Desde la Colonia, México a padecido ciclos de gran inseguridad y violencia criminal. Ya en la época del virrey marqués de Gelves y conde de Priego, en el tercer decenio del siglo XVII -- cuando se inició la decadencia de los Habsburgo españoles --, los salteadores de caminos eran una plaga sólo un poco menos peligrosa que los piratas. Ni la pena de muerte los detuvo. La situación mejoró un poco con la reorganización administrativa traída por los Borbones, pero con el estallido de la guerra de independencia en 1810 y el colapso del viejo orden colonial en 1821, la inseguridad en caminos y ciudades adquirió proporciones de pesadilla. La misma capital no se salvó del desastre, y como símbolo de la era está el brutal asesinato nunca bien aclarado del artista inglés Daniel Thomas Egerton y de su pareja -- con un embarazo muy adelantado --, en Mixoac una noche de 1842.

Las guerras civiles del siglo XIX fueron la época de oro -- o de plata si se piensa en los famosos bandidos “los Plateados” -- de secuestradores y salteadores de caminos, en particular del camino México-Veracruz. Soldados y bandidos eran en muchos casos una y la misma cosa, como Simón Gutiérrez, general y secuestrador en la región de Jalisco durante la Guerra de Reforma, o guerrilleros liberales y bandidos, como Manuel García Pueblita o Antonio Rojas. Benito Juárez, ante la gravedad de la situación, decidió “combatir el fuego con el fuego”, es decir, reclutar a ciertos criminales para ponerlos al frente de las “fuerzas del orden” -- la policía rural -- y combatir al resto. Como señala Paul Vanderwood, los resultados fueron ambiguos: “los bandidos de México se

volvieron rurales, pero siguieron siendo, en gran parte, bandidos. Policías y bandidos no son en realidad los antagonistas que se supone” (Desorden y progreso, México, Siglo XXI, 1986, p.91). La experiencia del siglo pasado vuelve a ser vigente hoy.

Fue la dictadura de Porfirio Díaz -- con la ayuda de los ferrocarriles -- la que más avanzó en la profesionalización del cuerpo de Rurales de la Federación (una fuerza no mayor de 2,500 hombres). Al iniciarse el siglo XX, una británica avecindada en Cuernavaca -- hoy una ciudad azotada por los secuestros --, Rosa King, afirmaba que en México “el orden y la seguridad parecen reinar día y noche”, situación particularmente notable si se considera apenas unos años antes al país se le veía como al mismísimo “manantial de la ilegalidad” (Tempest Over Mexico, Boston, 1935, p.24). Era demasiado optimista la dueña del mejor hotel de Morelos en 1910, pero ni duda que entonces México en su conjunto y su capital en particular, eran más seguros que antes.

Al finalizar la Guerra de Reforma, la Ciudad de México era considerada, como hoy, una de las urbes más peligrosas del mundo. La prensa de la época afirmaba que ningún capitalino se aventuraba a salir de noche de su casa sin ir armado; la pistola era ya parte de su indumentaria, (Jonathan Kandell, La Capital, Nueva York, Henry Holt, 1988, p.361). En contraste, al final del gobierno de Díaz en 1911, el Distrito Federal era una de las ciudades más vigiladas de la tierra -- un policía por cada 153 habitantes, el doble que en París o Londres -- y de las más seguras, al menos para las capas medias y altas. La presión policiaca sobre las “clases peligrosas” era mucha y constante. Los “gendarmes” arrestaban y amenazaban a los pobres día y noche bajo cualquier pretexto,

incluido el mero hecho de despertar sus sospechas. Y era sobre ellos que la policía ejercía su prepotencia y a los que extorsionaba con entera impunidad y de manera sistemática, (Julio Guerrero, La génesis del crimen en México, México, Vda. de C. Bouret, 1901, p. 381). En treinta años, el orden porfirista cuadruplicó el presupuesto destinado a la policía -- por primera vez los elementos de ese cuerpo tuvieron salarios que les permitieron formar parte de la pequeña clase media --, aumentó la vigilancia de los barrios pobres e impuso castigos muy severos a los criminales. En la primera etapa de la dictadura, los asesinatos de delincuentes a manos de la policía no eran cosa excepcional, pero más tarde el castigo severo se legalizó al adecuarse la letra de la ley con el espíritu de la época. No era entonces infrecuente que meros ladrones capitalinos terminaran en los terribles San Juan de Ulúa, Valle Nacional, Quintana Roo o las Islas Marías. Pese a todo, la calidad de los jefes policiacos nombrados por Díaz -- entre ellos, su propio sobrino -- siempre dejó que desear, y cuando Díaz fue derrocado, la profesionalización del cuerpo aún era más una meta que una realidad. Sin embargo, y comparado con lo que vendría, el último período de la dictadura fue uno de los mejores tiempos que vivió la capital mexicana en materia de seguridad y policía, (Laurence J. Rohlfes, "Police and Penal Correction in México City, 1876-1911", tesis doctoral, Tulane University, 1983, pp. 331-336).

La Revolución.- En los asuntos de policía y seguridad, la Revolución fue, en un sentido, una continuación del Porfiriato -- como en el viejo régimen, las varias policías que surgieron entonces fueron instituciones enteramente al servicio del régimen y muy eficientes para vigilar, controlar o destruir a la

oposición política, sin importar la legalidad de sus acciones --, pero en otro fue un retroceso, pues el esfuerzo de profesionalización no sólo se detuvo sino que se revirtió.

Como en el antiguo régimen, los jefes de policía de la Ciudad de México fueron, básicamente, militares. Primero generales surgidos de las filas revolucionarias, escogidos por los presidentes en función de su lealtad política y nada más. Así, por ejemplo, el temido general Roberto Cruz fue jefe de la policía capitalina cuando Plutarco Elías Calles era presidente, pero fue bruscamente sustituido por el general Antonio Ríos Zertuche cuando en 1928 se necesitó que un partidario del asesinado general Alvaro Obregón investigara el atentado contra el caudillo sonoreense. De esos personajes hechos en los campos de la revolución se pasó a los formados en las instituciones militares de la postrevolución, como los generales Ramón Mota Sánchez, José Domingo Ramírez Garrido Abreu o Enrique Salgado Cordero, para mencionar sólo a los más recientes. La profesionalización de los militares no significó que ocurriera lo mismo con la policía a su mando ni que hubiera un mejor desempeño de la institución. Sin embargo, ningún militar rebajó a la policía a los niveles logrados por Arturo Durazo Moreno, amigo de la infancia del presidente López Portillo, y que como credenciales para encabezar la policía capitalina tenía, además de la amistad presidencial, el haber sido chofer de un famoso gángster capitalino, empleado de correos, agente de tránsito y luego de otros departamentos policiacos. Como jefe de policía se hizo llamar “general” y, finalmente y como excepción a la regla, terminó en la cárcel.

El Problema y su Solución- El problema de la seguridad en la ciudad capital se ha agravado a raíz de la crisis económica que estalló en 1982. Un indicador es el promedio diario de robos violentos y no violentos, denunciados y que son sólo una parte pequeña del gran total. En 1994 ese promedio fue 150 pero el año pasado llegó a 269.

La solución a la inseguridad creciente no está simplemente en reclutar más militares con licencia para los puestos medios y altos de mando -- ya había 102 en diciembre de 1996 --, ni menos en volver a aplicar una variante de la ley fuga a presuntos criminales. La respuesta tampoco pareciera encontrarse en el mero aumento del número de policías, que al inicio de los noventa permitía una relación, al menos en el papel, de un agente en el ramo de seguridad por cada 125 habitantes, (Banamex, México social, 1992-1993, p. 394).

La recuperación de la seguridad pública va a requerir de mucha voluntad política y apoyo social, recursos materiales y tiempo. Por un lado, hay una correlación entre crisis económica -- desempleo y descenso de los niveles de vida de las capas populares -- y aumento de la criminalidad. Hay que atacar el lado social del problema y, a la vez, rehacer a la policía, pues la actual es irrecuperable. En el mejor de los casos el gobierno que va a tomar las riendas de la capital encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, podrá iniciar la tarea de ganar la gobernabilidad de las calles, pero en tres años no podrá enderezar lo que ha estado torcido por ochenta años. Sin embargo, Nueva York nos muestra que algo se puede hacer. Es verdad que por un lado la policía de "la gran manzana" ha sido acusada, y con razón, de racista y brutal por los inmigrantes haitianos, pero también lo es que el actual alcalde la puso a trabajar desde el primer día

para lograr primero la seguridad de los grandes espacios públicos -- parques, plazas y estaciones de metro y de tren -- luego la de las calles centrales y, finalmente, la de los barrios. Nueva York es hoy una ciudad más segura, pero sus problemas sociales ahí siguen, y ninguna fuerza policiaca es sustituto de fuentes de empleo y salarios decentes como base de una convivencia civilizada.

Los cuerpos de policía realmente profesionales, de la actual Guardia Civil española a la Real Policía Montada de Canadá, son resultado de un esfuerzo político y social sostenido. Esas policías combinan educación formal de nivel medio superior -- en Estados Unidos es común que los reclutas de la policía hayan salido de college -- con preparación técnica y cívica en escuelas especiales de alto nivel. Ser policía en México, y siguiendo los modelos exitosos, debería ser una carrera que se iniciara en la juventud, donde se ascendiera por méritos, se contara con respaldo técnico, se pudiera tener un nivel de vida de clase media, orgullo de cuerpo y el respeto y la supervisión de la sociedad.

¿Es mucho pedir que empecemos la construcción de esa nueva policía mexicana? Desde luego que sí, si vemos al pasado y al presente, pero no si dirigimos la mirada al futuro.

Correspondencia y comentarios: e-mail: Imeyer@colmex.mx